INFORMACIONES

1. Campaña de Amnesty International por el Uruguay

Del 20 de febrero al 20 de marzo se cumplirá una campaña mundial organizada por Amnesty International contra la tortura en el Uruguay. Se realizarán contactos a todo nivel, actos informativos y publicaciones, y se recogerán firmas para presentar una petición internacional al Presidente de la República con el fin de que el Gobierno uruguayo permita que una entidad independiente internacional investigue las denuncias de torturas. La petición circulará en todo el mundo y será presentada al Embajador del Uruguay en Londres, en nombre de Amnesty International, por el Secretario General de esa organización, Martín Ennals.

En Ginebra, la campaña se iniciará el viernes 20 de febrero con una Conferencia de Prensa a la que asistirán altos dirigentes de Amnesty International. Ese mismo día por la noche, habrá un espacio dedicado al Uruguay en el programa "Un jour, une heure" de la TV Suisse Romande.

2. Clausuran actividades de dos instituciones internacionales

Se clausuraron las actividades en todo el territorio nacional de la "Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos" (FUMEC) y de "Frontier Intership" (FI). La resolución fue adoptada por Bordaberry y sus Ministros del Interior y de Defensa Nacional. Se clausuraron las oficinas de ambas instituciones, incautándose todos los bienes existentes. Tanto la FUMEC como F.I. actúan en el ámbito latinoamericano a través de filiales diseminadas en todo el Continente. Organizan encuentros, conferencias y simposios con sus adherentes. El F.I., cuya sede se encuentra en Nueva York, constituye un programa internacional financiado por las Iglesias Metodistas y Presbiterianas de los EE.UU. y apoyado por algunas iglesias de Europa a través de becas de estudio, proyectos de asistencia y de ayuda. La resolución de clausura sostiene que "mantiene fundamentalmente una posición liberal y de apertura al diálogo con el marxismo-leninismo". "Además, tanto el "Frontier Intership" como la FUMEC, desarrollaron en forma conjunta una serie de proyectos piloto para refugiados, que tuvieron por finalidad ayudar económicamente a personas que por razones políticas abandonaron su país. De esa manera se contribuyó con exilados marxistas de Chile y de Bolivia". Más adelante agrega: "Las definiciones de la FUMEC sobre la lucha por la liberación de los pueblos son deliberadamente amplias y existen sectores en su organización que impulsan la lucha armada como la vía más adecuada". "Conforme a estos hechos, las actuaciones de las instituciones aludidas tienen un manifiesto designio político y sirven de instrumento en el plano internacional a la acción subversiva que desarrolla permanentemente el marxismo-leninismo". De acuerdo a lo expresado por la resolución, las posiciones teológicas de FUMEC, que tiene su sede en Ginebra, están identificadas con las expresadas en la revista "Perspectivas de Diálogo", recientemente clausurada por el Gobierno, oportunidad en que fueron detenidos el Padre Juan Luis Segundo y otros sacerdotes jesuitas del Centro Pedro Fabre, responsables de la edición de dicha revista.

3. Decenas de médicos presos mientras se construye nuevo Hospital Militar

Las Fuerzas Conjuntas vienen cumpliendo una serie de razzias contra trabajadores de todos los sectores del país. En los últimos días se han incrementado los arrestos de médicos pretextando su calidad de miembros del disuelto Partido Comunista, o de ser funcionarios del Sindicato Médico,

intervenido el 3 de octubre del año pasado. La lista parcial de los funcionarios de la salud detenidos a partir de diciembre es la siguiente: Dr. Juan José Ormaechea, Dr. Luis Fierro, Dr. Carlos Peluffo (cardiólogo especializado en Francia sobre un tipo de cardiopatía congénita), Dr. Fernando Rama (docente de la Facultad de Medicina), Dr. Tito País Figueira (médico pediatra, Prof. Adjunto del Hospital "Pedro Visca" y Tesorero de la Junta del Sindicato Médico del Uruguay), Dr. Godofredo Fernández, Dr. Liber Mandressi (cirujano plástico, directivo del Sindicato Médico del Uruguay), Dr. José Frejeiro (destacado neurocirujano), Dr. A. Machado, Dr. Hugo Sacchi (conocido ginecólogo), Dr. Armando Matos Vezzoli, Dr. Batista, Dr. Cirilo, Dr. Grosso, Dr. Tabaré González, Dr. Arbiza (cirujano cardiovascular), Dr. Buño (dentista), Dra. Cyarbide. Asimismo, se encuentra asilado en la Embajada de México en Montevideo, el Dr. Ricardo Caritat (especialista en tratamiento intensivo) junto con su esposa y tres hijos menores.

Nuevo Hospital Militar. El Director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Cnel. Lem Martínez (ex Director del Penal de Libertad) hizo uso de la palabra en la ceremonia que tuvo lugar con motivo de la iniciación de la construcción del futuro Hospital Militar que será por cierto el mejor del país.

4. Se exige cambiar la sede del Campeonato Mundial de Fútbol Universitario

La Unión Internacional de Estudiantes, con sede en Praga, denunció que los que organizan el Campeonato Mundial de Fútbol Universitario en Uruguay jamás han representado a los estudiantes y al pueblo uruguayo. Lo que procuran en definitiva es lograr un respaldo, con el que no cuentan, para proseguir desarrollando su política represiva, agrega la denuncia. La UIE subraya que han transcurrido más de 2 años desde la instauración del régimen encabezado por Bordaberry, que no ha vacilado en violar todos los derechos democráticos individuales. La Universidad (intervenida el 28 de octubre de 1973), ha sido blanco de la represión más brutal. Miles de uruguayos permanecen encarcelados e incommunicados, entre ellos estudiantes y profesores universitarios. La UIE ha podido verificar toda esta situación por medio de su representación en la delegación internacional que visitó Uruguay del 28 de mayo al 2 de junio de 1975. Ante esos elementos, y reafirmando su actitud solidaria, el Secretario de la UIE adoptó la decisión de respaldar a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en sus planteamientos. En concreto se exige cambiar la sede del campeonato a celebrarse del 1 al 15 de agosto de 1976 en Montevideo. Por otra parte, la FEUU señala que el deporte en general es objeto de escarnio por parte de la dictadura, como lo demuestra la transformación en campo de concentración del mayor escenario deportivo del Uruguay (el Cilindro), lugar en que se desarrolló el Campeonato Mundial Extraordinario de Básquetbol en 1966. El Secretario de la UIE llama a todas sus organizaciones miembros y amigas, a los promotores internacionales de esa iniciativa, a tomar medidas de inmediato para evitar que se desvirtúen los ideales que motivan tan importante competencia.

5. Protesta de Comerciantes Minoristas

El Centro de Comerciantes Minoristas y Dueños de Bares del Uruguay resolvió suspender su tradicional festejo anual fijado para el 25 de enero. Esta suspensión, la primera en 83 años de existencia del Centro, se efectúa en protesta por el nuevo régimen de tributación impositiva, vigente a partir del 1º de enero de 1976.

6. Ayuda del Banco Mundial al Gobierno uruguayo

El Banco Mundial continuará financiando proyectos de desarrollo de Uruguay porque considera que los planes del Gobierno tienen buena orientación y son consistentes y coherentes. Así se expresó el Vicepresidente del Banco Mundial, Adalbert Krieger, quién agregó que en 1975 el Banco

prestó 52 millones de dólares, a largo plazo, para el desarrollo de la agricultura y para la promoción de exportaciones industriales. Dijo, además, que "este último préstamo está destinado a promover las exportaciones industriales y ayudar a los empresarios a importar materias primas y exportar productos manufacturados. El incentivo de esta actividad tiene características muy importantes en el aumento de las oportunidades de empleo y del nivel de ingreso de la población". Asimismo, ratificó el Vicepresidente del Banco, "la institución brindará nueva asistencia financiera a Uruguay en 1976". El préstamo para financiación del desarrollo industrial fue firmado en Washington en el mes de diciembre, por el Ministro Vegh Villegas. El monto es de 35 millones de dólares y se destinará a impulsar las exportaciones y a renovar el parque industrial.

7. Informe sobre América Latina - SELA

En el Informe de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) se destacó que América Latina está obligada a la acción conjunta para utilizar a plenitud su capacidad de negociación y frenar su retraso. El documento, preparado por un grupo de expertos latinoamericanos, afirma que como consecuencia de la crisis económica mundial se ha registrado, en todos los países de América Latina una marcada reducción de la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto, aceleración de la inflación, aumento del desempleo y graves desequilibrios en las balanzas de pago. El informe señala que el ritmo de crecimiento del Producto Bruto para la región, en 1975, se redujo a la mitad del de 1974, y a poco más de dos tercios del promedio interanual de los últimos quince años. El ingreso per cápita disminuyó un 1% entre 1974 y 1975. El déficit de la Balanza Comercial de A. L. -excluidos los países exportadores de petróleo- fue de 10 mil millones de dólares, contra 9 mil del año anterior. El texto señala que las perspectivas de las balanzas de pago para los próximos años son también desfavorables, y añade que el financiamiento de los obligados déficit será cada vez más difícil y costoso. Estados Unidos -dice el documento- exporta a Latinoamérica tantos bienes de capital como los que vende a toda la Comunidad Económica Europea, y de tres a cuatro veces más de los que coloca en Japón. Por tanto -concluye- "los planteamientos de A. L. tendientes a mantener y acelerar su desarrollo y al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, no constituyen concesiones gratuitas de los países desarrollados, ni se encuadran dentro del plano caritativo, sino, por el contrario, son de gran importancia para los propios países desarrollados".

8. Costo de vida

Según informó la Dirección General de Estadística y Censos, el costo de la vida durante 1975 se incrementó en un 68,84%. Dentro del alza anual, la mayor incidencia correspondió al rubro alimentación con un 25,19%, en tanto que la vivienda aumentó un 16,34%, indumentaria un 7,47% y varios el 17,84%.

Precios de los alquileres. Se fijó el valor de la unidad reajutable para el mes de diciembre en 13,74 (pesos nuevos) a los efectos de la fijación de los precios que regularán los alquileres.

Aumento de salarios. Se otorgará a los funcionarios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados un aumento del 11% sobre sus retribuciones, el que regirá a partir del 1º de diciembre de 1975.

9. Prensa libre

A pesar de la enorme represión descargada desde hace ya varios años contra el pueblo uruguayo y sus organizaciones, en los último meses han proliferado las publicaciones de la resistencia, que circulan clandestinamente de mano en mano. No es necesario destacar el riesgo que implica su redacción,

impresión, distribución y aún el tenerlas en su poder. Con el esfuerzo de todos "andan por la calle", entre otras: "Carta Semanal" del P.C., "Nuevo Tiempo" y "Liberación" de la Unión Artiguista de Liberación, "Boletín de la Resistencia Oriental" de la R.O.E., "Justicia" del P.C.R., "Boletín" del Comité de Defensa de los presos políticos del Uruguay.

10. Gestión de la Nunciatura por Massera

De acuerdo a lo señalado por "Desde Uruguay" en su número 2 de 1976, la Nunciatura Apostólica realizó gestiones ante el Ministerio de Defensa por la libertad del Ing. José Luis Massera. "El País, citado por "Desde Uruguay", dio la noticia el 23 de enero último y destacó que la gestión "suscitó profundo malestar en los medios gubernamentales". Según la misma fuente, cumplió la diligencia el Secretario de la Sede Apostólica, Monseñor Guy de Saint Hillaire.

11. Desde California: Telegrama de matemáticos a Bordaberry

Un grupo de profesores de la Universidad de Berkeley, California, dirigió el siguiente telegrama a Bordaberry:

"Hemos sido informados alarmantes de nuestros colegas matemáticos acerca de nuestro conocido y respetado colega Profesor J. L. Massera. Le urgimos investigar el caso y confiamos nos pueda asegurar que su estado de salud es bueno y que sus derechos básicos son respetados".

Firman ocho matemáticos, encabezados por el Jefe del Departamento de Matemáticas de dicha Universidad.

12. Angustiosa situación de Comunidad del Sur

Este grupo comunitario de inspiración libertaria, formado por familias que trabajan principalmente en un taller de imprenta, ha sido objeto de un sinnúmero de atropellos desde el golpe de estado de 1973. Se llegó al extremo de encarcelar a todos los adultos y abandonar a su suerte a niños y adolescentes. Las brutales torturas, los allanamientos constantes durante la noche, la clausura del taller, impulsaron al grupo a salir con rumbo al Perú. Pero no cesaron con ello las dificultades: siete integrantes fueron detenidos en Buenos Aires y no se ha sabido nada de su suerte. El trabajo está parado, no hay recursos económicos. Comunidad del Sur pide ayuda material y un esfuerzo solidario del movimiento anarquista internacional y de los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo.

13. C C L A B C R A C I O N I S T A S

Cumplen funciones como "jueces" en los Juzgados Militares:

Instrucción: 1er. Turno: Coronel Gamarra; 2º Turno: Capitán de Marina Azarola; 3er. Turno: Coronel Libio Camps; 4º Turno: Capitán de Navío Oscar Pío Llorens; 5º Turno: Coronel Santiago Acuña (denunciado ante las Cámaras por Bardesio como integrante del tristemente célebre Escuadrón de la Muerte); 6º Turno: (Vacante).

Instancia: 1er. Turno: Coronel Spinelli; 2º Turno: Coronel (PAM) Bia;
3er. Turno: Coronel Ascoyfia; 4º Turno: Coronel Luis Blanco Vila
("además" da clases de Filosofía en Secundaria).
5º Turno: Coronel Eduardo Silva.

Supremo Tribunal Militar: Coronel Busconi, Coronel Hermes Sosa Ila,
Coronel Federico Silva Ledesma (único abogado).

Conjueces de la Suprema Corte de Justicia: Coronel Pratto, Brigadier Remo Laporta.

ANEXO ESPECIAL AL GRISUR Nº 40

LA CIT CONDENA LA DICTADURA DE BORDABERRY

El Comité Administrativo de la Oficina Internacional del Trabajo (CIT) en su reunión del mes de noviembre, aprobó un informe del Comité de Expertos sobre Relaciones y Libertades Sindicales de dicha entidad. El dictamen confirma las denuncias elevadas por los sindicatos sobre la falta de libertades y la represión antisindical existente en el Uruguay; del dictamen se desprende que la disolución de la central obrera Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y de diversos sindicatos, fue ilegal; que los derechos sindicales universalmente reconocidos -de expresión, de reunión, de organización- no tienen vigencia en el Uruguay; que decenas y cientos de dirigentes y militantes sindicales han sido presos y sometidos a juicios excesivamente prolongados; que contra ellos se ejercen torturas; que muchos dirigentes sindicales han sido despedidos como forma de represalia; que diversos sindicatos han sido ilegalmente allanados y despojados de sus bienes por las fuerzas policiales. Todo ello en violación de la legislación vigente, que ha sido RATIFICADA por Uruguay.

Nota: Debe tenerse en cuenta que el texto de este informe es anterior a la ola más reciente de represión desatada a fines de 1975, que agravó considerablemente la situación de las organizaciones y militantes gremiales.

La OIT examinó las denuncias enviadas por la Federación Sindical Mundial, la Confederación Mundial del Trabajo, la CNT del Uruguay, la Central Latinoamericana de Trabajadores y muchas otras organizaciones sindicales nacionales e internacionales.

En algunas de sus partes, la resolución de la CIT establece que:

"Las quejas contienen diversos alegatos sobre la represión del movimiento sindical en Uruguay después de los acontecimientos de junio de 1973 y se refieren en particular, a la disolución de la CNT, la restricción de los derechos sindicales, la detención y las órdenes de detención de dirigentes y militantes sindicales y los actos de discriminación sindical".

"La medida de disolución de las cámaras legislativas tuvo por consecuencia una huelga general decretada por la CNT y el gobierno decretó la disolución de esa organización."

La disolución de la CNT

La resolución alude a que la huelga general tenía por objeto ... "defender la Constitución"... y que la CNT calificaba a Bordaberry como ... "personero de la rosca oligárquica"... La disolución de la central obrera, dice la resolución, fue hecha invocando una ley de Asociaciones Ilícitas ... "que nunca había sido aplicada con anterioridad"...

Condenando la disolución de la CNT la CIT señala:

"... toda medida de disolución de una organización sindical debería ser basada en la comisión de actos ilegales especificados en la legislación como causales de disolución. La verificación de este hecho es función que corresponde normalmente a jueces... En realidad, la disolución pronunciada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de funciones legislativas, del mismo modo que la disolución por vía administrativa, no permite asegurar los derechos de defensa que sólo pueden ser garantizados por un procedimiento judicial normal, procedimiento que el Comité siempre ha considerado de primordial importancia. Es por este motivo también que el Convenio 87 establece en su Artículo 4 que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa".

"El Comité considera que el gobierno uruguayo no ha observado esta disposición al disolver por decreto la CNT, y por consiguiente, recomienda al Comité de Administración que llame la atención al gobierno sobre este hecho y reitera la importancia que concede al respeto de la norma contenida en el Artículo 4 del Convenio 87, ratificado por el Uruguay."

La resolución de la CIT se pronuncia sobre la falta de derechos sindicales en el Uruguay. Reseña el decreto 622 de la dictadura, que reglamenta las actividades sindicales. El delegado enviado a Montevideo por la CIT dice en su informe que, aunque el decreto está en vigor, sus textos

"han sido aplicados sólo en parte. Esto es reconocido por el propio gobierno. Lo que parece aplicarse es la reglamentación del derecho de huelga y la prohibición a los sindicatos de dedicarse a actividades políticas".

El delegado de la CIT subraya que

"uno de los motivos de la falta de aplicación del decreto N° 622 consiste en que los trabajadores se reafiliaron en masa a los antiguos sindicatos, cuando el gobierno esperaba que se produjera un cambio al respecto (el subrayado es nuestro). En cuanto a la posición del gobierno, al parecer el decreto no resultó enteramente apropiado y requería modificaciones que se propone efectuar y que además, la situación política y económica del país hacía poco oportuna su aplicación..."

La CIT señala que la realización de asambleas sindicales requiere autorización previa policial y que

"... la situación cambia según los sindicatos. Mientras que la CGTU^{*/} y sus sindicatos no parecen tener problemas, los sindicatos que estaban afiliados a la CNT ven muchas veces rechazadas sus solicitudes de autorización."

En cuanto a las negociaciones colectivas, la CIT señala que en abril de 1974 se suspendió la representación sindical de COPRIN (organismo regulador de precios y salarios, en su origen de integración tripartita) por

^{*/} Entidad pro-gubernamental, vinculada a un pequeño número de organizaciones.

"... estimar las autoridades que los sindicatos no representaban ni legal ni efectivamente los intereses de los trabajadores. A su vez, después de junio de 1973 no parece haberse efectuado negociaciones propiamente dichas..."

La resolución de la CIT es rotundamente condenatoria de la dictadura en materia de derechos sindicales y exige urgentes medidas. Dice la resolución de la CIT

"La descripción anterior de la legislación y de los hechos reales revela no sólo la existencia de normas y prácticas restrictivas que afectan las reuniones de los sindicatos, la recaudación de sus cuotas, su libertad de expresión y el reconocimiento de sus dirigentes por las autoridades y los empleadores sino también, en forma más general, la situación irregular en que se encuentran estas organizaciones, que no pueden obtener una existencia legal y ven así limitadas su gestión interna y sus actividades específicas, en defensa de los intereses de los trabajadores."

Dirigentes y militantes sindicales presos

La resolución de la CIT alude a los alegatos sobre dirigentes y militantes sindicales presos o con orden de detención, entre ellos, los dirigentes de la CNT José D'Elía (Presidente), Enrique Pastorino (Secretario) y Wladimir Turiansky (Vicepresidente). La resolución denuncia la ola represiva en Uruguay

"Según indica el informe del representante del Director General, las detenciones de dirigentes o miembros de los sindicatos han sido relativamente numerosas en el período subsiguiente a los acontecimientos de 1973 y el Gobierno no lo niega."

"Las detenciones se han efectuado ya sea en virtud de las medidas prontas de seguridad, ya sea por presuntas infracciones penadas por el Código Penal Militar o por la ley de seguridad del Estado de 1972."

Según el representante del Director de la CIT, las prisiones se debieron a actividades tales como

"... la coordinación intersindical, el cobro de cuotas sindicales, las reuniones en locales sindicales, las reivindicaciones en la empresa o ante las autoridades, con o sin paro en apoyo de las mismas, los preparativos para el 1º de mayo y la distribución de material de propaganda (a veces de publicaciones clandestinas de la CNT y de partidos políticos disueltos..."

El representante del Director General de la CIT denuncia la duración excesiva de los procedimientos de la justicia militar. Los fiscales militares le afirmaron que las demoras

"deben imputarse al hecho de que sólo hay 6 jueces militares de instrucción, al gran número de inculcados y en ciertos casos, a las necesidades de la investigación".

Torturas a Dirigentes Sindicales

El representante de la CIT dice al respecto

"...Hubo sindicalistas que recibieron golpes, fueron encapuchados y obligados a permanecer muchas horas de pie o sentados o fueron sometidos a la inmersión de la cabeza u obligados a berrar inscripciones murales en las calles de la ciudad. Un dirigente sindical dijo haber recibido golpes graves y otras formas de tortura."

En las conclusiones del Consejo de la OIT se muestra preocupación por E. Pastorino, J. D'Elía y W. Turiansky. Además señala

"... que reitere el principio por el que en todos los casos, inclusive cuando se acusa a sindicalistas de delitos de carácter político o de derecho común, que el gobierno considere sin relación alguna con sus funciones o actividades sindicales, los interesados deberían ser juzgados en el más breve tiempo posible por una autoridad judicial imparcial o independiente"

"En relación con los alegatos sobre malos tratos ... que señale al Gobierno la importancia de tomar todas las medidas que resulten necesarias, incluyendo instrucciones específicas y sanciones efectivas, para asegurar que ningún detenido sea sometido a malos tratos."

En otra de sus partes, la resolución de la OIT condena la disolución del SUNCA (Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Anexos) y de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Como se sabe, la sede del SUNCA fue transformada en cárcel y local de torturas por el Cuerpo de Granaderos de la Policía de Montevideo.

El allanamiento de locales sindicales

Al respecto, la OIT señala

"... el representante del Director General manifiesta que es patente y el Gobierno lo reconoce, que en el período siguiente a junio-julio de 1973, y particularmente después de la huelga general, numerosos locales sindicales fueron allanados, fueron incautados ficheros, publicaciones, libros, máquinas de escribir y útiles de oficina... Todos los locales allanados pertenecen a sindicatos afiliados a la CNT, mientras que los dirigentes de sindicatos afiliados a la CGTU declararon no haber sido objeto de estas medidas... Los allanamientos tienen por objeto intimidar a los sindicatos y crear un clima de inseguridad que tiene por resultado desalentar la concurrencia de los afiliados a los locales sindicales."

"El Comité observa que los allanamientos de los locales sindicales ... continúan siendo relativamente frecuentes ... Estos allanamientos son practicados por la policía, que actualmente no necesita mandamiento judicial para ello, en virtud del régimen de medidas prontas de seguridad".

Más adelante, la OIT se extiende sobre los despidos de los trabajadores sindicalizados señalando que ... "Las informaciones ... indican que principalmente a causa de la huelga de 1973, pero posteriormente también por otras razones, muchos dirigentes y militantes perdieron sus empleos en el sector privado o fueron destituidos o suspendidos en el sector público".

Consideraciones generales de la OIT

La resolución de la OIT contiene conclusiones condenatorias para la dictadura de Bordaberry, que resumimos:

"La situación sindical actual en el Uruguay tiene su origen en la crisis económica, social y política que se ha desarrollado en ese país en los años que precedieron a los acontecimientos de junio de 1973. Al disolver el Parlamento, el Poder Ejecutivo ha resuelto también la paralización de las actividades políticas. La disolución de la CNT ... parece haber tenido por principal objeto eliminar una oposición organizada y virulenta a su política, principalmente en el campo económico... (El Gobierno) ha adoptado una legislación y práctica restrictivas que afectan los derechos sindicales y que tienen por consecuencia en diversos casos la adopción de medidas muy severas contra militantes, dirigentes y organizaciones sindicales... (Por tanto)... es urgente proceder a la normalización sindical, tanto en la legislación como en la práctica ... que ... sólo obtendrá plena vigencia si se garantizan las libertades civiles, que son esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales."